

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL**

REFERENCIA	EJECUTIVO
DEMANDANTE	ADRIANA MARÍA GUZMÁN GUZMÁN
DEMANDADO	ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.
RADICADO	05001 22 03 000 2023 00185 00
	INTERNO 2023-20
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N°094
DECISIÓN	RECHAZA DEMANDA, ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA.

Medellín, veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Mediante apoderado judicial, la señora Adriana María Guzmán Guzmán presentó demanda ejecutiva pretendiendo se ejecute el laudo arbitral proferido el diez (10) de febrero de 2023, por Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, siendo procedente entonces decidir sobre la competencia de este Tribunal para avocar conocimiento de la presente demanda.

I. ANTECEDENTES.

Para definir el conflicto jurídico suscitado entre la convocante Adriana María Guzmán Guzmán y las convocadas ATC Sitios de Colombia S.A.S. y Blanca Margarita Guzmán Guzmán, el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín emitió, el 10 de febrero de 2023, Laudo Arbitral en cuya parte resolutive determinó:

“PRIMERO. Conceder a la parte convocante la PRETENSIÓN 1 de la demanda, por ello se DECLARA que la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. y la señora BLANCA MARGARITA GUZMÁN GUZMÁN incumplieron el contrato de arrendamiento suscrito el dieciocho (18) de octubre de 2007, por no dar cumplimiento a las cláusulas TERCERA y DÉCIMO NOVENA del mencionado contrato.

SEGUNDO. Conceder a la parte convocante la PRETENSIÓN 2 de la demanda, por ello se DECLARA terminado el contrato de arrendamiento suscrito el dieciocho (18) de octubre de 2007 y, en consecuencia, ordenar a la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. la restitución del inmueble objeto del contrato de arrendamiento antes indicado a la señora ADRIANA MARÍA GUZMÁN GUZMÁN, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Los cánones de arrendamiento serán reconocidos hasta la fecha efectiva de restitución. Para ello, de manera respetuosa, se comisiona al Juez Civil Municipal de la ciudad de Medellín, a quien por reparto corresponda el respectivo despacho, funcionario que, de no hacerse efectiva la restitución en el plazo señalado, dará cumplimiento a la restitución aquí ordenada, de conformidad con las normas aplicables. Por la secretaria del Tribunal se libraré el correspondiente Despacho Comisorio, adjuntando copia del presente laudo.

TERCERO. Desestimar todas las excepciones formuladas por la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., conforme a las valoraciones realizadas en la parte considerativa del presente escrito.

CUARTO. Conceder a la parte convocante la PRETENSIÓN 3 de la demanda, condenando solidariamente a la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. y a la señora BLANCA MARGARITA GUZMÁN GUZMÁN al pago de la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$36.208.968) por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los cánones de arrendamiento adeudados por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. desde el mes de marzo de 2016, hasta la fecha de presentación de la demanda. Dicha suma de dinero deberá ser pagada a la convocante dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

QUINTO. Conceder a la parte convocante la PRETENSIÓN 3 de la demanda en los términos literales en la que fue solicitada, condenando solidariamente a la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. y a la señora BLANCA MARGARITA GUZMÁN GUZMÁN al pago de la suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$724.179) correspondiente a los intereses moratorios a una tasa del dos por ciento (2%) mensual sobre la suma de dinero indicada en el RESUELVE TERCERO. Dicha suma de dinero deberá ser pagada a la convocante dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

SEXTO. Reconocer a la parte convocante, bajo el amparo del artículo 206 del CGP, que tiene derecho al pago de la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$7.827.477,83) a título de intereses moratorios, por los perjuicios causados con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta el día 10 de febrero de 2023. Dicha suma de dinero deberá ser pagada de manera solidaria por la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. y la señora BLANCA

MARGARITA GUZMÁN GUZMÁN a la convocante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 92 Los intereses se seguirán causando hasta la fecha de pago efectivo.

SÉPTIMO. Conceder a la parte convocante la PRETENSIÓN 4, condenando solidariamente a la sociedad ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. y a la señora BLANCA MARGARITA GUZMÁN GUZMÁN a restituir y/o pagar a la señora ADRIANA MARÍA GUZMÁN GUZMÁN la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 7.931.051) a título de costos, gastos del proceso arbitral y agencias en derecho. Dicha suma de dinero deberá ser restituida y/o pagada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si dicha suma no fuere pagada en la oportunidad indicada, se deberán reconocer y pagar intereses moratorios, a la máxima tasa permitida por la ley, hasta el día en que se verifique el pago.

OCTAVO. Negar a la parte convocante la PRETENSIÓN 5, por cuanto al concedérsele el pago de los intereses moratorios, la actualización de las cifras concedidas no es procedente.

NOVENO. Decretar la causación y pago al Árbitro único y a la Secretaria del Tribunal, del cincuenta por ciento (50%) restante de sus respectivos honorarios, los cuales deberán ser cancelados por la ejecutoria del Laudo o de la providencia que decida su aclaración, corrección o complementación (conforme a lo consagrado en el artículo 28 de la Ley 1563 de 2012).

DÉCIMO. Decretar y ordenar el pago de la Contribución Especial Arbitral de que tratan los artículos 16 a 23 de la Ley 1743 de 2014, modificada por el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016, equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de los honorarios pagados al Árbitro y al Secretario, los cuales deberán consignarse en la Cuenta del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del Laudo o de la providencia que decida sobre su aclaración, corrección o complementación.

DÉCIMO PRIMERO. Ordenar, de conformidad con lo consagrado en el artículo 28, inciso 2 de la Ley 1563 de 2012, que el árbitro realice la liquidación final y la rendición de las cuentas razonadas del proceso y, si a ello hubiere lugar, la devolución a ambas partes de las sumas no utilizadas de la partida "Gastos de funcionamiento del Tribunal".

DÉCIMO SEGUNDO. Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes del presente proceso, con 93 las constancias de ley y remitir el expediente al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín".

Con sustento en la anterior decisión, mediante apoderado judicial, la señora Adriana María Guzmán Guzmán presentó demanda ejecutiva únicamente en contra de la sociedad ATC Sitios de Colombia S.A.S., pretendiendo:

“1. Que se libre mandamiento ejecutivo a favor de mi poderdante y en contra de la sociedad comercial denominada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. 900.377.163-5, por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$36.208.968) por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los cánones de arrendamiento adeudados por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. desde el mes de marzo de 2016, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

2. Que se libre mandamiento ejecutivo a favor de mi poderdante y en contra de la sociedad comercial denominada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. 900.377.163-5, por la suma de suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$724.179) correspondiente a los intereses moratorios a una tasa del dos por ciento (2%) mensual sobre la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$36.208.968) por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los cánones de arrendamiento adeudados.

3. Que se libre mandamiento ejecutivo a favor de mi poderdante y en contra de la sociedad comercial denominada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. 900.377.163-5, por la suma de suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$7.827.477,83) a título de intereses moratorios, por los perjuicios causados con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta el día 10 de febrero de 2023, más los intereses causados hasta la fecha de pago efectivo.

4. Que se libre mandamiento ejecutivo a favor de mi poderdante y en contra de la sociedad comercial denominada ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. 900.377.163-5, por la suma de suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 7.931.051)a título de costos, gastos del proceso arbitral y agencias en derecho más los intereses moratorios, a la máxima tasa permitida por la ley, hasta el día en que se verifique el pago. 5. Se condene al demandado al pago de las costas y gastos del presente proceso”.

La demanda fue dirigida para reparto de este Tribunal Superior de Medellín – Sala Civil y, en el acápite de competencia, de forma escueta y carente de sustento jurídico, señaló el abogado de la demandante: *“Usted es competente, señor Magistrado, tanto por la cuantía de la actuación como por ser el juez de conocimiento dentro del proceso que proviene de un Tribunal*

de Arbitramento”. Y para la determinación de la cuantía indicó:

“Para la presente demanda estimo que el valor adeudado por la parte demandada asciende a la suma de Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos (\$52.691.675), discriminados así:

a) La suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$36.208.968) por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los cánones de arrendamiento adeudados por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. desde el mes de marzo de 2016, hasta el momento de la presentación de esta demanda.

b) La suma de suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$724.179) correspondiente a los intereses moratorios a una tasa del dos por ciento (2%) mensual sobre la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$36.208.968) por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los cánones de arrendamiento adeudados.

c) La suma de suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$7.827.477,83) a título de intereses moratorios, por los perjuicios causados con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta el día 10 de febrero de 2023, más los intereses causados hasta la fecha de pago efectivo.

d) La suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 7.931.051)a título de costos, gastos del proceso arbitral y agencias en derecho más los intereses moratorios, a la máxima tasa permitida por la ley, hasta el día en que se verifique el pago”.

II. CONSIDERACIONES

1. EL ARBITRAMENTO.

La Constitución Política de Colombia de 1991, luego de precisar en su artículo 116, que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, los Tribunales y los jueces, son los encargados de administrar justicia, función que también compete a la Justicia Penal Militar y al Congreso, estatuye a renglón seguido, que *“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.*

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 270 de 1996 en su ordinal 3º, prescribe que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política: *“Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso.”*

Así las cosas, resulta oportuno precisar que el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, definía¹ el arbitraje como *“un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”*.

La nueva normativa en la materia, Ley 1563 de 2012, *“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”*, en su artículo primero se encarga de ilustrar sobre la Definición, modalidades y principios, así:

“El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.

El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.

El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico.

En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”.

Tradicionalmente se han extraído como características propias de la figura del arbitramento las siguientes: **(i) es voluntario**, porque la decisión de sustraer el conocimiento de un asunto determinado de la jurisdicción

¹ Artículo derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.

ordinaria, para que de él conozca un tribunal de arbitramento, obedece a un acuerdo de voluntades adoptado previamente por los contratantes; **(ii) es temporal**, porque las atribuciones jurisdiccionales que se le dan a los árbitros no son indefinidas sino limitadas en el tiempo y concretamente a aquel que dura la decisión del asunto planteado; y, **(iii) es excepcional**, porque sólo los asuntos susceptibles de ser transigidos, pueden ser ventilados ante un tribunal de arbitramento.

La Corte Constitucional por su parte, ha tenido la oportunidad de referirse al arbitraje en los siguientes términos:

“El artículo 116 de la Constitución Política junto con la Ley 446 de 1998, desarrollan la figura del arbitramento, entendido como un mecanismo alternativo de solución de controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto, a fin de que un tercero particular, revestido temporalmente de función jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para las partes.

Los árbitros se pronuncian sobre los hechos que dieron lugar a la controversia, resuelven las pretensiones de las partes, practican y valoran las pruebas, resuelven el litigio con fundamento en los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los principios de equidad, y sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada. Por estas razones, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la decisión arbitral es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial.

Para la Corte, al igual que como ocurre con los jueces de la República, los árbitros son, si bien de manera transitoria, “autoridades públicas” en el lenguaje del artículo 86 de la Carta Política, por lo cual pueden ser demandados a través de la acción de tutela cuando sus decisiones vulneren de manera directa los derechos fundamentales de las personas”.

2. LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL.

Sabido se tiene que, en nuestro ordenamiento jurídico el juez arbitral no posee *imperum* ni *coertio*, esto es, aunque su decisión está revestida de cosa juzgada, la ejecución de sus laudos corresponde realizarla a la justicia ordinaria, así se establece claramente del capítulo IX artículos 111 a 115 de la Ley 1563 de 2012, al disponer que la ejecución de los laudos se realiza ante la autoridad judicial competente, requiriendo, en algunos casos de laudos internacionales, el trámite previo de reconocimiento del laudo. Las referidas normas que regulan el tópico del reconocimiento y ejecución de los laudos, establecen:

“ARTÍCULO 111. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. Los laudos arbitrales se reconocerán y ejecutarán así:

1. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya proferido, será ejecutable ante la autoridad judicial competente, a solicitud de parte interesada.

2. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el laudo original o copia de él. Si el laudo no estuviere redactado en idioma español, la autoridad judicial competente podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo a este idioma.

2. Los laudos dictados en arbitrajes internacionales cuya sede sea Colombia se considerarán laudos nacionales y, por ende, no estarán sujetos al procedimiento de reconocimiento y podrán ser ejecutados directamente sin necesidad de este, salvo cuando se haya renunciado al recurso de anulación, caso en el cual será necesario su reconocimiento.

3. Para la ejecución de laudos extranjeros, esto es de aquellos proferidos por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre fuera de Colombia, será necesario su reconocimiento previo por la autoridad judicial competente. (Resaltado intencional).

ARTÍCULO 112. MOTIVOS PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO. Solo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, en los casos y por las causales que taxativamente se indican a continuación:

a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella pruebe ante la autoridad judicial competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:

i. Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; o

ii. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos; o

iii. Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

iv. Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley del país donde se adelantó o tramitó el arbitraje; o

v. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o fue anulado o

suspendido por una autoridad judicial del país sede del arbitraje; o

b) Cuando la autoridad judicial competente compruebe:

i. Que, según la ley colombiana, el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje; o

ii. Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional de Colombia.

Si se hubiere pedido la anulación o la suspensión del laudo ante una autoridad judicial del país sede del arbitraje, la autoridad judicial colombiana, si lo considera procedente, podrá aplazar su decisión sobre el reconocimiento del laudo y, a instancia de la parte que pida aquello, esta podrá también ordenar a la otra parte que otorgue caución apropiada.

ARTÍCULO 113. COMPETENCIA FUNCIONAL. *La decisión adoptada por la autoridad judicial competente en el trámite de reconocimiento de los laudos que conforme a la presente sección demanden del mismo se tramitará en única instancia y contra ella no procederá recurso o acción alguna.*

ARTÍCULO 114. NORMATIVIDAD APLICABLE AL RECONOCIMIENTO. *Al reconocimiento del laudo arbitral se aplicarán exclusivamente las disposiciones de la presente sección y las contenidas en los tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia. En consecuencia, no serán aplicables las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil sobre motivos, requisitos y trámites para denegar dicho reconocimiento, disposiciones que se aplicarán únicamente a las sentencias judiciales proferidas en el exterior.*

ARTÍCULO 115. TRÁMITE DEL RECONOCIMIENTO. *La parte que pida el reconocimiento presentará la solicitud ante la autoridad judicial competente acompañada de los documentos a que se refiere el artículo 111.*

En caso de encontrar completa la documentación, la autoridad judicial competente admitirá la solicitud y dará traslado por diez días (10) a la otra u otras partes.

Vencido el término del traslado y sin trámite adicional, la autoridad judicial competente decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.

ARTÍCULO 116. EJECUCIÓN. ***Reconocido el laudo en todo o en parte, de su ejecución conocerá la autoridad judicial competente.*** (resaltado intencional).

III. CASO CONCRETO

Como se anticipó, debe determinar este Tribunal si ostenta la competencia para asumir el conocimiento de la presente demanda ejecutiva que formula la señora Adriana María Guzmán Guzmán en contra de ATC Sitios de Colombia

S.A.S., encaminada a ejecutar las condenas contenidas en el laudo arbitral proferido el diez (10) de febrero de 2023, por Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.

Ya se explicó en las consideraciones generales de esta providencia que, los árbitros no tienen facultad para ejecutar sus decisiones, en cuya virtud la Ley 1563 de 2012 otorga competencia, de forma genérica y, sin mayor detalle, a la “*autoridad judicial competente*”.

Como la ley que regula el arbitraje no establece de forma concreta cuál es la autoridad judicial competente, necesario resulta entonces analizar las normas procesales que reglamentan el tema de la ejecución y el tópico de la competencia en materia civil concatenándolas con las normas del arbitramento, con el fin de identificar, en cada caso concreto, esa generalidad de “*autoridad judicial competente*” a que categoría de juez corresponde.

El artículo 422 del Código General del Proceso establece qué documentos constituyen títulos ejecutivos demandables ante la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil y dispone: “*Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184*” (Resaltado intencional).

Y el artículo 306 ibídem regula el tema de la ejecución de las providencias judiciales y así:

“Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo

proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.

Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán las reglas de los incisos anteriores.

Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.

La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción. (Resaltado intencional).

Sobre competencia para conocer el recurso de anulación del laudo el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, dispone:

“Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje.

Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión de laudos arbitrales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo <sic> arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

Analizadas las normas transcritas se evidencia que la **jurisdicción ordinaria en la especialidad civil** es la competente para conocer la ejecución de un laudo arbitral, a menos que en éste intervenga una autoridad pública porque en ese caso corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo;

pero, no puede concluirse, como al parecer lo hizo la parte demandante, que por ello la competencia se radique en la “*Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje*”, porque las normas de ejecución del laudo sólo refieren a la misma **jurisdicción** que conoce la anulación, esto es, de forma general aluden a la denominación jurisdicción para diferenciar la ordinaria de la contenciosa, pero no señalan que la competencia se radique en el mismo juez o en la misma categoría de juez que conoció la anulación, siendo cosas distintas la jurisdicción y la categoría específica de un juez que según las reglas de competencia debe conocer un asunto, en tanto, existen al interior de la misma jurisdicción diferentes categorías de jueces (municipales, circuito, tribunales).

Ahora, revisadas las normas de competencia de la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria (artículos 15 a 34 C.G.P.), se observa que no existe cláusula alguna que atribuya de forma especial, a una categoría de juzgado u órgano colegiado, la competencia para la ejecución de laudos arbitrales, de donde se concluye que dicha ejecución se rige por las reglas generales para la determinación de la competencia; de modo que, al tratarse de un asunto contencioso, debe ser conocido de acuerdo a la cuantía por el juez civil municipal -si es de mínima o menor- o por el juez civil del circuito -si es mayor- (artículos 17, 18 y 20 numerales 1 del Código General del Proceso).

El anterior entendimiento coincide con el que le ha dado la doctrina al tema; así, el doctrinante Juan Pablo Cárdenas Mejía, autor del Módulo de Arbitraje Nacional e Internacional de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, expone en dicho documento:

“En la medida en que el tribunal cesa en sus funciones por la ejecutoria del laudo arbitral, no es posible que el propio tribunal ejecute el laudo.

De la ejecución del laudo conoce la jurisdicción ordinaria por regla general y excepcionalmente la jurisprudencia contenciosa.

Esta regla es precisada por el artículo 306 del Código General del Proceso que señala que “La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y

trámite de cada jurisdicción.” El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos “ejecutivos ... provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública”. En este punto debe observarse que de conformidad con la Ley 1563 de 2012, la jurisdicción contenciosa es competente para conocer del recurso de anulación de los laudos proferidos en procesos en que ha sido parte una entidad pública o un particular que cumple funciones administrativas. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 306 del Código General del Proceso, la jurisdicción de lo contencioso administrativa conoce de los recursos de anulación de laudos proferidos en procesos arbitrales en que es parte una entidad pública o un particular que cumple funciones administrativas.

En materia civil la competencia corresponderá al juez civil del circuito o al juez municipal según la cuantía de la condena, y en materia territorial se aplicarán las reglas del Código General del Proceso.

En lo administrativo la competencia corresponderá al tribunal administrativo o al juez administrativo según la cuantía (artículos 152.7 y 155.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) ...” (Resaltado intencional).

Y ese alcance de las normas aludidas, es el que también le ha dado la Corte Suprema de Justicia al asunto; véase por ejemplo el auto AC 1677 de 2018 M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en el cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve un conflicto de competencia sobre la ejecución de un laudo; allí, aunque la Corte no realiza un análisis sobre todos los factores de competencia, sino que se centra en el estudiar el factor territorial que es el que suscita la discusión, el desarrollo del caso concreto permite concluir claramente la aplicación que esa Corporación realiza de las normas generales de competencia y que avala que la misma se radique en el juez que de acuerdo a dichos factores generales de competencia le corresponde una demanda contenciosa. En la mentada providencia dijo la Corte:

“2. El artículo 116 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (ley 1563 de 2012), consagra las reglas de competencia sobre las controversias que se han de ejecutar Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00793-00 3 ante la autoridad judicial, puntualizando que: «Reconocido el laudo en todo o en parte, de su ejecución conocerá la autoridad judicial competente»

3. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios, o

son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.

Al respecto la Sala ha manifestado que: ... como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).

A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».

Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (*forum domicilium reus*), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00793-00 4 juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (*forum contractui*).

Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).

4.- La demandante optó adelantar la ejecución ante el Juez Promiscuo Municipal de Marinilla, a quien podía acudir en virtud del numeral 3° del artículo 28 *ibídem* por cuanto, estaba ejecutando obligaciones contenidas en un laudo arbitral, entre ellas, la restitución de algunas zonas comunes de la copropiedad ubicadas en esa vecindad.

5. En ese orden de ideas, bajo el entendido de un conflicto de competencia solamente por el factor territorial, la promotora eligió accionar ante el juez de Marinilla, localidad del cumplimiento de la obligación, es elección que conforme el precedente de esta Corte *ut supra*, debió respetar el funcionario que primero conoció el asunto y no repudiar su conocimiento. Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente. Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00793-00 5 6.- En consecuencia, se remitirá el presente caso al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla (Antioquia) para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida”

De todo lo estudiado en precedencia se concluye entonces que, para la ejecución de un laudo arbitral la jurisdicción competente es aquella que debió conocer la anulación, en este caso, la jurisdicción ordinaria especialidad civil; pero, para determinar el juez específico competente dentro de la denominada jurisdicción ordinaria especialidad civil, se deben atender a las normas generales que regulan la competencia en materia procesal civil, no siendo adecuado que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín asuma competencia de la demanda encaminada a la ejecución de un laudo porque, de conformidad con el artículo 31 del C.G.P.², **los Tribunales Superiores de Distrito Judicial no tienen asignado el conocimiento de procesos contenciosos en primera instancia**, en tanto su competencia se circunscribe al conocimiento de segundas instancias, recursos de queja, de revisión, de anulación y solicitudes de cambio de radicación.

En el caso bajo examen, la sociedad demandada está domiciliada en la ciudad de Bogotá (reglas 1 y 5 artículo 28 C.G.P.); no se evidencia que se hubiese establecido un lugar especial para el cumplimiento de la obligación ejecutiva (regla 3 artículo 28 C.G.P.), ni tampoco se advierte que la demandada tenga una sucursal o agencia y que el asunto esté vinculado a determinada sucursal o agencia (regla 5 artículo 28 C.G.P.); además; la sumatoria de las pretensiones de la demanda, como afirma el apoderado de la misma parte demandante y se constata en la cuantificación realizada por este Despacho, asciende a \$52.691.675 (menos de 150 s.m.l.m.v.) (artículo 25 C.G.P.), lo que implica que la competencia para conocer esta demanda contenciosa corresponda a los jueces civiles municipales de la ciudad de

² **ARTÍCULO 31. COMPETENCIA DE LAS SALAS CIVILES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES.** Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil:

1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito.
2. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito. En estos casos, conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso.
3. Del recurso de queja contra los autos que nieguen apelaciones de providencias proferidas por las autoridades mencionadas en los numerales anteriores.
4. Del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces civiles de circuito, civiles municipales y de pequeñas causas, y por las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales.
5. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales que no esté atribuido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo [30](#).

PARÁGRAFO. El Procurador General de la Nación o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también están legitimados para solicitar el cambio de radicación previsto en el numeral 6.

Bogotá (regla 1 artículo 18 C.G.P.), a donde se dispondrá la remisión, conforme lo estipula el artículo 90 del C.G.P.³.

Se advierte que esta remisión no implica que indefectiblemente el juez a quien corresponda por reparto la demanda deba obligatoriamente admitirla o librar mandamiento de pago, pues este Tribunal se limitó a establecer la carencia de competencia para asumir el conocimiento de la misma; pero, precisamente, al no ser competente, no se estudiaron los demás requisitos para la admisión del libelo genitor, como tampoco el título ejecutivo, labor que le corresponde realizar al juez civil municipal de Bogotá y en la cual podrá encontrar deficiencias que conlleven eventualmente a la inadmisión o al rechazo.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

RESUELVE

RECHAZAR POR FALTA DE COMPETENCIA la presente demanda y, en consecuencia, se **ORDENA REMITIR** el expediente digital a la oficina de reparto de los juzgados civiles municipales de la ciudad Bogotá para que se reparta a éstos, conforme lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

³ “**ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA.** El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose...”

Firmado Por:
Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **369905a3b4b05bf21df55f2eb376cfbe8e3c68ffc89b7cd92229a90f558dfe61**

Documento generado en 23/06/2023 08:05:19 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>